



**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE:	<b>JESÚS ANTONIO CASTAÑEDA FIGUEROA</b>
DEMANDADA:	<b>COLPENSIONES</b>
TIPO DE PROCESO:	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
DECISIÓN:	<b>CONFIRMA</b>

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, se reunió para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en el Proceso Ordinario Laboral adelantado por el señor **JESÚS ANTONIO CASTAÑEDA FIGUEROA** en contra de **COLPENSIONES**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el 04 de febrero de 2020.

Se reconoce personería para continuar en representación de los intereses de la parte demandada, a la abogada Ingrid Clemencia Gómez Peñalosa, portadora de la Tarjeta Profesional N° 129.610 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento laboral.

**ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:**

**COLPENSIONES:** Que el demandante no cuenta con las 50 semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuración de su invalidez, tal como lo exige la ley 797 de 2003, y que bajo el principio de la condición más beneficiosa, tampoco alcanza el cumplimiento de los requisitos de la norma inmediatamente anterior, que en este caso es la ley 100 de 1993, esto es, ni con las 26 semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la ley 860 de 2003, ni en el último año anterior a la fecha de estructuración (por ser afiliado no cotizante); como tampoco con los requisitos desarrollados por la Corte Constitucional para la aplicación del salto normativo al Decreto 758 de 1990.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

## SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

### ANTECEDENTES

#### PRETENSIONES:

Declarar que el demandante presenta una PCL del 82.25% con fecha de estructuración del 31/03/2012. Y que como consecuencia, se le reconozca y pague la Pensión de Invalidez a cargo de Colpensiones, y los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100/93.

#### HECHOS:

- 1) Que Colpensiones mediante dictamen 17235340 del 06/09/2017 le estableció una PCL del 82.25% con fecha de estructuración del 24/03/2017.
- 2) Que solicitó la pensión de invalidez a Colpensiones, la que en Res. 295385 del 26/12/2017 se la negó, argumentándole que no cuenta con el número mínimo de semanas cotizadas.
- 3) Que la fecha de estructuración de la invalidez se debe establecer para el momento en que el trabajador pierde el 50% de su capacidad laboral; en este caso, para el mes de marzo/2012, fecha a partir de la cual le fue imposible seguir laborando.
- 4) Que presentó como última cotización al sistema, el 31/03/2012, fecha para la cual tenía un total de 554.29 semanas cotizadas en toda la vida laboral, de las cuales 50 lo fueron en los 3 años anteriores a la invalidez como lo exige la norma.

#### SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

**DISPUSO** tener como válido el dictamen proferido por la Facultad de Salud Pública de la UdeA, donde se determinó como fecha de estructuración de la PCL del actor, el 13/08/2014. **ABSOLVIÓ** a la demandada de todas las pretensiones de la demanda y se **ABSTUVO** de condenar en Costas procesales al demandante por amparo de pobreza.

Dijo el A-quo que acoge el dictamen emitido por la Udea el cual establece como F.E el 13/08/2014, pero que la demandante no reúne las semanas mínimas para causar el derecho pensional, y que no es posible tener como fecha de estructuración la fecha de la última cotización, dado que para dicha fecha no presentaba invalidez alguna.

#### APELACIÓN PARTE DEMANDANTE

Aduce que la A quo no aplicó debidamente la teoría de la capacidad laboral residual, en la medida que el demandante padece una enfermedad crónica, degenerativa y congénita desde el año 2006, y su última cotización lo fue para el 31/03/2012, lo cual implica que se debe tener como fecha de estructuración o por lo menos contabilizar las semanas cotizadas desde esta última fecha hacia atrás, de conformidad con el principio de favorabilidad.

Que el demandante reúne las semanas mínimas exigidas para causar el derecho a la pensión de invalidez, y que se debe tener como fecha para el conteo de las semanas mínimas, ora la fecha de solicitud de la calificación, ora la fecha del dictamen, ora la fecha de la última cotización.

## CONSIDERACIONES DE LA SALA

- **Competencia:** Principio Consonancia art. 66A del C.P. T. y S.S., adicionado, art 35 de la L. 712 de 2001.
- **Objeto:** Determinar en el caso a estudio, si hizo bien o no el A-quo en determinar el 13/08/2014 como fecha de estructuración de invalidez del demandante; y en caso positivo, verificar si éste reúne o no los requisitos mínimos para causar el derecho pensional deprecado. Veamos:

3

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, Mod. Por el Art. 142 del Decreto 019/12, señala las entidades competentes para determinar en una primera oportunidad, la pérdida de la capacidad laboral, el grado de invalidez, y el origen de las contingencias, y ellas son: Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y las Entidades Promotoras de Salud EPS. Que una vez agotado este trámite, si el interesado no está de acuerdo con la calificación, dentro de los cinco días siguientes a la manifestación que hiciere sobre su inconformidad, acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez del orden Regional, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional, durante el proceso de calificación. Pero más aún, la decisión que allí se adopte, a su vez puede ser controvertida ante la justicia laboral ordinaria, aportando y pidiendo las pruebas que se consideren pertinentes, por ejemplo, otro dictamen médico, el que debe ser valorado en su oportunidad por el Juez que decida el caso de conformidad con los artículos 11 y 40 del Decreto 2463 de 2001, los cuales establecen que los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez no son actos administrativos y sólo pueden ser controvertidos ante la justicia laboral ordinaria con fundamento en el artículo 2o. del Código de Procedimiento Laboral.

Ahora, es perfectamente viable dentro del debate judicial que el juez valore los dictámenes aportados al plenario de manera independiente, puesto que como ha sido reiterado por la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, ellos no son pruebas solemnes, y por lo tanto, el juzgador respecto de ellos no está sometido a la tarifa legal de prueba. En consecuencia, como prueba pericial que es, queda sometida a la libre formación de convencimiento del juez (art. 61 CPT y de la SS.).

Sobre el tema, dicha Corporación en Sentencia del dieciocho (18) de septiembre de dos mil doce (2012), radicado No. 35450, M.P: Jorge Mauricio Burgos Ruiz, indicó:

“De la misma manera tiene señalado la Corporación, que el dictamen de COLPENSIONES no obliga al juzgador y que si para definir una determinada controversia se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, uno rendido por la junta regional y otro por la nacional, podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad analizado dentro del conjunto de elementos probatorios con los que cuente, pudiendo también optar si lo considera menester, por ordenar un tercer dictamen, todo dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.”

En igual sentido se pronunció la misma Corporación en SL 16374 del 04 de noviembre de 2015, Rad. 53986, M.P LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS, así:

... En tal sentido, en sentencia CSJ SL, del 19 de oct. de 2006, rad.29622, sobre acotó la Corporación:

“Por otra parte, la circunstancia de que la Junta Nacional actúe como órgano de segunda instancia para resolver las reclamaciones formuladas por los interesados contra las evaluaciones de las juntas regionales, no necesariamente su concepto obliga al juez. De no ser así, ciertamente carecería de sentido la intervención de la jurisdicción laboral simplemente para dar un aval al pronunciamiento de un ente que, tal cual lo reconoce la censura, no tiene la potestad del Estado para “decidir” el derecho. Sólo el juez puede, con la fuerza que imprime a sus decisiones el instituto de la cosa juzgada, definir si hay lugar a establecer el estado de invalidez o los parámetros en que debe reconocerse la pensión objeto de controversia y, para tal propósito, nada le impide acudir al apoyo de un ente especializado en la materia y que cumple funciones públicas, así sus miembros no sean servidores del Estado, en virtud del moderno esquema de administración descentralizada por colaboración”.

Otras Sentencias al respecto, son la del (15) de mayo (2012), radicación no. 41670. M. P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón y más recientemente, la SL 4571 del 23/10/2019, Radicación 79197, M.P Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Ahora, procede la Sala a verificar los dictámenes de pérdida de capacidad laboral del actor que obran al interior del presente proceso:

ENTIDAD	Origen	FECHA DEL DICTAMEN	% PCL	FECHA DE ESTRUCTURACION	FOLIOS
Colpensiones	Común	06/09/2017	82.25%	24/03/2017	14 a 19
JRCI	Común	28/03/2019	82.25%	24/03/2017	122 a 124
UdeA	Común	28/08/2019	82.25%	13/08/2014	191 a 199

Como puede apreciarse, los 3 dictámenes coinciden en establecer una PCL superior al 50%; coincidiendo en todo caso los dictámenes de Colpensiones y de la JRCI en la fecha de estructuración (24/03/2017), diferenciándose en éste punto el dictamen emitido por la Facultad de Salud Pública de la UdeA, el cual señaló como fecha de estructuración el 13/08/2014, siendo este último y en aplicación del principio de libre formación del convencimiento establecido en el artículo 61 del CPT y de la SS, el que mayor certeza le ofrece a la Sala, en la medida que se basa en un estudio pormenorizado de la Historia Clínica del paciente y de los exámenes paraclínicos que a él se le practicaron; y es que tanto el dictamen de Colpensiones como el de la JRCI basan tal fecha de estructuración (24/03/2017) en la fecha de valoración médica realizada por oftalmología al actor, en la que se le determinó la ceguera bilateral, pero lo cierto es que según su Historia clínica, visible a folios 32 a 81, desde el año 2014 ya éste presentaba graves perturbaciones en la visión, según verificación realizada por la UdeA al señalar en las conclusiones del dictamen de folios 196 a 198, lo siguiente “...*el paciente presenta un cuadro de baja visión con gran afectación funcional. Estas condiciones fueron descritas en nota de historia clínica del 13/08/2014 a folio 70 donde se describe: “...campo visual menos de 10 grados, J7, EXC (excavación) 0.99 – 10 presenta baja visión profunda ... presenta dificultades en la marcha, no utiliza bastón, es independiente en autocuidado, ocasionalmente sale solo pero es complicado...”* y concluye el dictamen “*después de lo expuesto, la fecha de estructuración se define de acuerdo a lo descrito en la norma y criterios materiales, para el 13/08/2014; fecha en la cual se tiene evidencia de que las deficiencias presentadas por*

*el paciente dan una pérdida de capacidad laboral (PCL) superior al 50% y una condición clínica limitante significativa en su funcionalidad laboral y social”.*

Ahora, solicita la parte demandante en su recurso de apelación, que se establezca como fecha de estructuración de su invalidez, la fecha de solicitud del dictamen de PCL, ora la fecha de la emisión del dictamen o la fecha de la última cotización, en aplicación de la teoría de la capacidad laboral residual.

5

Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que cuando ella se ha generado de manera inmediata como consecuencia de accidentes o de enfermedades, la fecha de estructuración de la invalidez coincide con la fecha de ocurrencia del hecho; pero que en otros eventos esas fechas no coinciden, por ejemplo, cuando se padecen enfermedades congénitas, crónicas, o degenerativas, puesto que en ellas, la pérdida de capacidad puede ser progresiva.

Dicha Corporación en SU 588 de octubre 27 de 2016 M.P Alejandro Linares Cantillo, diferenció los conceptos de fecha de estructuración material (artículo 3° del Decreto 917 de 1999), de la fecha de estructuración residual, que tratándose de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, “los efectos no aparecen de manera inmediata, sino que éstos se desarrollan dentro de un lapso prolongado, **ocasionando que la fuerza laboral se vaya menguando con el tiempo y, por lo tanto, permitiendo a la persona trabajar hasta tanto el nivel de afectación sea de tal magnitud que le impida de manera cierta desarrollar una labor**”; determinándose la pérdida de capacidad laboral en una fecha posterior a aquella en la cual aparece el primer síntoma de la enfermedad, por ejemplo en la fecha de calificación.

Así las cosas, la teoría de la capacidad laboral permite que una vez **estructurada la pérdida de la misma**, el trabajador **continúe ejecutando funciones productivas** que le permitan su subsistencia mínima, o en términos de la Corporación Constitucional, explotando su capacidad residual para fines económicos hasta un momento **posterior a la fecha de estructuración** fijada en el dictamen.

Sin embargo, aprecia La Sala que tal teoría no encaja en el presente caso, dado que lo pretendido por el demandante no es que se le constituya una fecha con posterioridad a la determinada por la Facultad de Salud Pública de la UdeA (13/08/2014), y/o a la emitida por Colpensiones y por la JRCI (24/03/2017), sino con anterioridad a la fecha de estructuración de su invalidez, concretamente, el 31/03/2012. Pero lo cierto es que no existe prueba en el proceso que permita establecer que para la fecha de la última cotización realizada por el último empleador del demandante -Construcciones GAP-, aquél presentara una condición física de tal magnitud que le haya impedido seguir laborando, o por lo menos brilla por su ausencia tal prueba al interior del proceso. Razón suficiente para entrar a **CONFIRMAR** la decisión del A quo.

### **PENSIÓN DE INVALIDEZ**

De tal manera, de acuerdo con la fecha de estructuración -13/08/2014-, la norma aplicable al caso corresponde a los artículos 38 y 39 de la ley 100 de 1993, este último modificado por el artículo 1° de la ley 860 de 2003, el cual dispone:

ARTÍCULO 38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, **hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.**

...

Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: **Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración...**

Según se desprende de la Historia laboral del actor (folios 22 a 25 y 106 a 113), se tiene que éste cotizó un total de 554.29 semanas en toda su vida laboral, de las cuales **24.3** semanas lo fueron en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, esto es, entre el **13/08/2011 y el mismo día y mes del año 2014**, número de semanas insuficiente para causar el derecho pensional en aplicación de la ley 860/2003; sin contar además con el 75% de las semanas mínimas requeridas para la pensión de vejez, conforme al parágrafo 2 del artículo 39 de la ley 100/1993, para un nuevo análisis (25 semanas en los últimos 3 años), ya que a éste, según el artículo 9 de la Ley 797/03 se le exige un mínimo de 1.300 semanas, contando con 554.29 en toda la vida laboral, cuando el 75% corresponde a 975 semanas. **CONFIRMA.**

#### **PRINCIPIO DE CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA**

Al respecto, si bien la Sala de Casación Laboral de la C. S. de Justicia acoge actualmente la aplicación del principio de condición más beneficiosa en la sucesión o tránsito legislativo de Ley 797/03 a Ley 100/93, es decir, respecto de la normativa inmediatamente anterior a la vigente al momento del siniestro, limita la temporalidad de la aplicación de tal principio al término de 3 años, que por tratarse de pensión de invalidez, lo es cuando la fecha de estructuración del afiliado acontece entre el **26/12/2003** y el mismo día y mes de **2006**. Así lo determinó en SL Rad. 45.262 del 25 de ene/17, Magistrados Ponentes Fernando Castillo Cadena y Gerardo Botero Zuluaga, SL3292, Rad. 59.030 del 27 de jun/18, Y SL3701, Rad. 68.322 DEL 1 de ago/18, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.

Sin embargo, en el caso de autos no se cumplen los requisitos para la aplicación de tal principio con la ley 100/93; en 1er lugar, porque el actor que no era cotizante activo en el último año anterior a la fecha de estructuración de su invalidez, no tenía las 26 semanas cotizadas dentro de ese lapso de tiempo, y en segundo lugar, porque según se infiere de su Historia Laboral –folios 22 a 25 y 106 a 113-, la fecha de estructuración como ya se dijo ocurrió el 13/08/2014, es decir, por fuera del límite temporal antes referido; lo que significa que no tenía una situación jurídica concreta que pudiera ser amparada por el analizado principio.

Ahora, la Corte Constitucional en SU 442 del 18 de agosto de 2016, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, permitió el salto normativo para los casos donde estuviera involucrada la pensión de invalidez estructurada en vigencia de la Ley 860 de



2003, no solo hacia la normativa inmediatamente anterior, sino incluso hasta las previsiones consagradas en el Decreto 758 de 1990, precisándose en la referida providencia que:

5.3.10. “...

Del mismo modo, si la invalidez se estructuró en vigencia de la Ley 100 de 1993 en su redacción original, pero la persona cotizó 300 semanas o más antes de entrar en vigor el sistema general de pensiones como lo exigía el Decreto 758 de 1990, el principio de la condición más beneficiosa permite la aplicación de esta última. (...)”.

7

Postura ésta reiterada en múltiples Sentencias de Tutela, entre ellas, en las ST- 012 de 2014, 566 de 2014, 194 de 2016, y 002A del 17 de enero de 2017 M.P Jorge Iván Palacio Palacio.

Postura ésta que aunque también es acogida por esta Sala, no permite que el demandante pueda acceder a la pretendida pensión, pues tampoco cotizó el número mínimo de semanas contemplado en el Decreto en cita, que por remisión del art 25 ibídem, en su art 6, literal b, era de 150 dentro de los (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época, siempre con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, -que para el demandante lo fue el 01 de abril de 1994, por encontrarse cotizando a Colpensiones con empleadores del sector privado-. Y es que a dicha fecha el actor sólo había alcanzado a cotizar en todo el tiempo nueve (09) semanas; siendo un número inferior al exigido por la norma en cita.

**CONFIRMA ABSOLUCIÓN.**

Sin Costas Procesales en esta sede, por estar el demandante cobijado por amparo de pobreza.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**DECIDE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la Sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el 04 de febrero de 2020, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por el señor **JESÚS ANTONIO CASTAÑEDA FIGUEROA** en contra de **COLPENSIONES**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Providencia.

**SEGUNDO:** Sin Costas Procesales en esta Instancia.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Los Magistrados,

8



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**



**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL  
TRIBUNAL SUPERIOR DE  
MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó  
por estados N ° 54 del 05/04/2021

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>